

Transformaciones socioproductivas, actores sociales y modelos de desarrollo rural en disputa. Reflexiones en torno al conflicto agrario reciente en la Región Pampeana

Javier Balsa (UNQ-CONICET)
Natalia López Castro (Becaria CONICET-UNQ)

Introducción

El conflicto entre el gobierno nacional y los productores agropecuarios, especialmente de la Región Pampeana, que estalló en marzo de 2008, disparó una serie de interrogantes acerca de las condiciones de su emergencia, las características de los actores involucrados y sus discursos, su devenir y la forma en que encontró resolución. Entre otras preguntas, podemos interrogarnos acerca de ¿por qué la mayoría de los productores, incluso los pequeños, adhirió a la posición de la Mesa de Enlace, a pesar de que su propuesta se identifica con el sostenimiento de un modelo concentrador? ¿Por qué la Federación Agraria Argentina (FAA) se sumó a la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas y CONINAGRO, para lanzar un paro agrario nacional? ¿Por qué el gobierno, teniendo el aparato del Estado a su disposición, no logró plantear una alternativa al “modelo sojero”? ¿Por qué los productores agropecuarios lograron instalarse ante la opinión pública como los representantes de los intereses del “interior”?

No esperamos poder responder todas estas preguntas, pero sí aportar algunos elementos que contribuyan a contestarlas. En esa línea, trataremos los cambios en la estructura social agraria, el papel jugado por la renta de la tierra en el proceso que ha atravesado el sector, las condiciones políticas y sociales para la construcción de proyectos alternativos y las fuentes de legitimación de la protesta y los cambios en los discursos y la ideología de los actores sociales agrarios.

Para abordar estas cuestiones combinaremos el análisis de los estudios realizados por otros investigadores e investigadoras, con los resultados de nuestros propios trabajos acerca de las transformaciones de los sujetos agrarios y los cambios en sus ideologías; así como también, los posicionamientos de productores familiares frente al conflicto.

Procesos socioproductivos y dilución de las fronteras entre actores sociales

¿Cómo explicar la unidad en la acción que tuvieron los piquetes de productores rurales en toda la Región Pampeana, y la masividad de las concentraciones en las principales ciudades del país? En especial, considerando la supuesta heterogeneidad de la estructura social agraria pampeana, de la que habíamos estado hablando la mayoría de los que nos dedicamos a los estudios rurales, y más aún teniendo en cuenta las historias, tradiciones y tensiones que han existido entre los distintos tipos de productores rurales pampeanos y que han cristalizado en las diferentes organizaciones que los representan.

Una primera línea de respuesta puede ensayarse en torno a la idea de que, al menos los productores que dan cuenta del grueso de la producción pampeana no son tan diferentes entre sí, pues ha ocurrido cierta homogeneización en sus características centrales. Esta relativa homogeneización resulta del desarrollo de dos transformaciones: por un lado, un intenso proceso de concentración de la producción agropecuaria, que, en especial, a partir de 1976, fue dejando fuera del sector a la gran mayoría de los pequeños productores, y, en las últimas décadas, también a buena parte de los medianos. El reducido peso de los pequeños y mediano-pequeños productores es una de las claves de esta homogeneización. El segundo proceso ha sido la transformación de los productores mediano-grandes.

Concentración y grandes empresarios rurales

En cuanto al primer fenómeno, si bien es posible rastrear sus primeros antecedentes desde los años cincuenta, el proceso se aceleró a partir de la década de 1970, con la aplicación de un programa económico neoliberal, y ha ganado aún mayor importancia y profundidad en las últimas décadas. Es decir que la concentración de la actividad agropecuaria pampeana no puede identificarse exclusivamente como producto de las tendencias más recientes sino que se remonta a varios decenios atrás (Balsa, 2008a).

Ahora bien, durante las últimas décadas del siglo XX, el avance del capitalismo sobre el agro pampeano se vio acelerado por la aplicación de

medidas de desregulación, apertura y liberalización económica que propiciaron la configuración de un nuevo modelo productivo, con altos requerimientos en términos de escala, tecnología y capital disponible. A partir de la segunda mitad de la década del noventa, la agriculturización de la región se basó casi exclusivamente en el cultivo de soja modificada genéticamente. Este modelo se afianzó a partir de la devaluación de 2002 y el ciclo de buenos precios internacionales.

Entonces, las tendencias precedentes se vieron incentivadas, en tanto el esquema productivo dominante actuó como “punta de lanza” de la penetración del capital, y la concentración se instaló como una dinámica “inexorable” del modelo de desarrollo agrario pampeano: se naturalizó. Pero, como todo fenómeno social, el proceso de concentración requiere de sujetos que lo lleven adelante. El avance del nuevo modelo y su carácter concentrador se vinculó con una complejización del escenario social del sector a partir de la aparición de nuevos agentes y la transformación de algunos de sus actores tradicionales.

Entre los nuevos actores se destaca el ingreso de capitales financieros extra-agrarios, bajo las modalidades de *pools* de siembra y Fondos de Inversión Directa (FDI). Ellos habían tenido un primer momento de expansión a mediados de los años noventa (Posada, 1998), pero a partir del año 2002, la evolución favorable de los precios internacionales en el mercado agropecuario y la salida de la convertibilidad generaron excelentes condiciones de rentabilidad en el agro, que si bien coyunturalmente beneficiaron a quienes estaban endeudados (pequeños y medianos productores), estructuralmente propiciaron una entrada de capital en el agro (Martínez-Ili, 2008).

Estos actores imprimen una dinámica particular a la actividad al imponer una lógica vinculada con la especulación financiera de alto rendimiento, y no ya con la actividad productiva con proyección en el mediano y largo plazo. Si bien en gran medida este tipo de estructura de negocios encuentra base en capitales extra-agrarios que buscan diversificar sus colaciones, resulta también significativo su desarrollo por parte de antiguos productores retirados, e incluso, cooperativas profesionales de ciudades y localidades intermedias, e incluso, cooperativas agropecuarias. Este tipo de emprendimientos, además, se organizan sin incurrir en la inmovilización de capital a través de la compra de tierras, ya que se desarrollan básicamente sobre tierras arrendadas.

Esta característica permite explicar la relativamente escasa concentración de la tierra, en medio de un proceso de alta concentración productiva y económica. Justamente, la expansión de este tipo de esquemas de negocios fue en detrimento de los productores propietarios más pequeños, que solían expandirse basándose en el arrendamiento (y de este modo llega-

ban a ser productores medianos, con cierta escala) y que en las condiciones actuales no pueden competir con los altos cánones de arriendo que ofrecen los *pools*. Ante la perspectiva de excelentes negocios, el capital se ubicó como demandante de tierras y condicionó con su avance las posibilidades de persistencia de los productores mediano-pequeños. Otra característica de estas nuevas formas productivas es que tampoco inmovilizan capitales en la compra de maquinaria, sino que hacen un amplio uso de los contratistas de labores.

Por otra parte, en las últimas décadas fueron creciendo y fortaleciéndose grandes empresas de origen tradicionalmente agropecuario. Con una proyección temporal diferente a la de la inversión propia de la estrategia de los FDI, se desarrollaron estructuras empresariales novedosas. En algunos casos tienen un origen capitalista-terrateniente, y en otros, son parte del estrato más exitoso de los hijos de los chacareros. Estas nuevas formas de grandes empresas agropecuarias funcionan sobre la base de un esquema de redes, aplican la más alta tecnología, emplean los servicios de profesionales y contratistas, y se posicionan muy favorablemente en el mercado, por las ventajas en la negociación de condiciones y precios que les otorga la escala de sus operaciones (Azcuy Ameghino y Fernández, 2007; Barsky y Dávila, 2008). En este aspecto, así como en su expansión sobre tierras arrendadas⁶², estas empresas se acercan en sus esquemas de desarrollo a la lógica de los *pools* y representan la aplicación de los modelos capitalistas más sofisticados a la producción agropecuaria.

Pero, además de esta irrupción de actores relativamente nuevos, desde mediados del siglo XX asistimos a importantes transformaciones en actores tradicionales. En primer lugar, la mayoría de los terratenientes pampeanos, que durante la década del sesenta lograron recuperar el control de los campos que tenían en arriendo, comenzaron a hacerse cargo de la agricultura en forma relativamente directa: con asalariados o, cada vez más, con contratistas de labores. Creció así en importancia la figura del terrateniente-capitalista (Murmis, 1979). Luego, en los años noventa se registró el reposicionamiento de los grandes productores terratenientes tradicionales⁶³. Las grandes explotaciones tradicionalmente ganaderas, reorientaron su actividad hacia la agricultura, adoptando estrategias empresariales modernas e incorporando tecnología a la producción y la administración.

⁶² Este rasgo es resaltado por la autoidentificación de uno de los empresarios emblemáticos del actual modelo, Gustavo Grovocopatel, como un "sin tierra".

⁶³ Más allá de no acordar con la valoración que realiza sobre su importancia en el conjunto de la agricultura pampeana, resultan de utilidad las descripciones de estos nuevos terratenientes, contenidas en Basualdo (2008).

Si bien en comparación a períodos históricos anteriores las superficies que controlan no son tan importantes, la valorización de la tierra los posiciona muy favorablemente en cuanto a la dotación de recursos.

Ahora bien, las enormes unidades productivas, del tipo "*pools* de siembra", y las remozadas grandes estancias, que ahora se dedican a la agricultura, han crecido en importancia, en términos numéricos y también en cuanto al volumen productivo, pero son los productores mediano-grandes, es decir, unidades de 500 ó 2000 hectáreas, los que siguen siendo los actores predominantes en la región⁶⁴. Es por ello, que consideramos también muy importante, para comprender la actual estructura agraria, prestar atención a lo que hemos denominado el proceso de aburguesamiento de los chacareros pampeanos.

Aburguesamiento de los chacareros

Desde las décadas del sesenta y setenta, la mayoría de los productores familiares más capitalizados, que eran descendientes de los chacareros arrendatarios de la primera expansión agrícola, comenzaron a desarrollar un proceso de "aburguesamiento" (Balsa, 2006). En primer lugar, cambiaron su lugar de residencia, trasladándose a centros urbanos cercanos. Entre las principales causas de este fenómeno aparece el objetivo de escolarización de los hijos y el acceso a un mejor nivel educativo. El traslado de la familia al pueblo o la ciudad resultó, por su parte, en el abandono de pautas de consumo y de estrategias de obtención de bienes básicos tradicionales.

Se dejaron atrás las producciones para autoconsumo, las pautas de austeridad en los gastos (muy diferentes del consumo urbano), la lucha por mantener la tierra en tanto patrimonio familiar (y extender la superficie en propiedad, de ser posible), los lazos de solidaridad comunitaria y vecindad, y una psicología de la producción y el trabajo. Estos elementos se fueron disolviendo a medida que la familia se instaló en la ciudad, y así, la forma de organización productiva fue perdiendo una de sus características distintivas. El núcleo familiar dejó de funcionar como un equipo de trabajo, y tanto las mujeres como los hijos se desvincularon

⁶⁴ Así, por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, según la última información estadística disponible, en 2002, el 65% de la superficie agropecuaria estaba a cargo de explotaciones de entre 200 y 2500 ha (si bien sabemos que existió un subregistro de los *pools* de siembra en este relevamiento censal, difícilmente una correcta medición hubiera alterado significativamente este porcentaje). Más detalles en Balsa (2008a).

crecientemente de las tareas productivas, salvo en ocasiones de gran demanda como las cosechas.

En segundo lugar, la familia se adaptó muy rápidamente a las pautas de consumo urbano de las clases medias y medias altas de las localidades, e incorporó en su horizonte la necesidad de acceder a los bienes de ostentación propios de ellas. En consonancia con este cambio en la perspectiva de las familias, se transformó también el modo en que los productores se ven a sí mismos y la forma en que manejan sus actividades. La racionalidad familiar, chacarera, es reemplazada por una racionalidad crecientemente capitalista, y los productores se identifican cada vez más como empresarios rurales. Un importante porcentaje de los ex chacareros logró insertarse en el modelo dominante manteniendo la propiedad de la tierra y adoptando el paquete tecnológico a través de la tercerización de las labores⁶⁵.

En síntesis, en estos casos, ya casi nada queda del carácter familiar de la producción chacarera, y la distancia social que hoy separa a un ex chacarero aburguesado de un terrateniente-capitalista mediano, o de un socio de un pool de siembra local, es cada vez menos importante.

La caracterización de estos actores nuevos y “renovados” da cuenta de que existe una base social para el desarrollo y sostenimiento del modelo maximizador de ganancias a través de la expansión en la escala productiva (asociado últimamente al cultivo de soja), con gran inversión de capital y nuevos esquemas de organización del trabajo, y en el cual la renta y la ganancia capitalista (y ya no el trabajo familiar) representan las fuentes principales de ingresos.

Probablemente por eso es que este conjunto de actores, en tanto beneficiarios del modelo concentrador, se erigieron en sus defensores durante el conflicto y reaccionaron frente a una medida que potencialmente podría morigerar el crecimiento del esquema productivo basado en la expansión de la soja, como principal exportación agropecuaria, y en este sentido, afectaba directamente sus ingresos.

Como históricamente la intervención estatal en el agro había tenido (además del objetivo de captar recursos para el sector urbano) la función de apoyar a la explotación familiar, todo este conjunto de actores abogó contra toda “intromisión” del Estado en el sector agrario. Por eso, durante el conflicto de 2008 centraron sus acciones y su discurso en el rechazo a todo tipo de intervención estatal en la actividad económica. Muestra de

esta actitud, alineada con una perspectiva liberal-conservadora, es que en ningún momento se planteó desde estos actores la posibilidad de discutir la fórmula de cálculo de las retenciones que determinaba la Resolución 125 y la curva resultante, ni se propuso una fórmula alternativa que permitiera garantizar subsidios en períodos de bajos precios y una aceptable apropiación de ganancias durante los períodos de precios altos. Directamente se cerró la posibilidad de diálogo en ese sentido, y el retroceso del Estado se erigió en la única salida posible.

Importancia de la renta del suelo

Un segundo factor explicativo de la acción conjunta se relaciona con el peso de la renta del suelo y el efecto de las retenciones móviles sobre ella. Esta incidencia del tema de la propiedad privada de la tierra y de la renta del suelo en el conflicto se relaciona con el avance, en los últimos años, del fenómeno del rentismo. Muchos de los tradicionales productores pampeanos, pequeños y medianos, se han ido convirtiendo en rentistas o cuasi rentistas, ya que los que habían sido arrendatarios o aparceros accedieron a la propiedad de la tierra en las décadas de 1940, 1950 o 1960 (los que no lo habían logrado para 1967 fueron expulsados de sus explotaciones por un decreto de la dictadura de Onganía) y, como ya dijimos, la mayoría de ellos no mantuvieron su perfil de productores familiares capitalizados.

Una parte de los pequeños y medianos propietarios se mantienen como productores propietarios, pero tienen cada vez más a la tierra como su principal fuente de ingresos, ya que ha ocurrido una valorización de esta, al tiempo que aconteció una descapitalización (muchos productores ya no tienen equipos de maquinaria propios sino que utilizan a contratistas de servicios) y una reducción del peso del trabajo propio (y de sus familiares). De este modo, muchos productores se han convertido en lo que denominamos como “cuasi rentistas”: conservan un involucramiento en la actividad productiva, ya que están a cargo de las explotaciones, y realizan inversiones de capital circulante, pero no aportan ya trabajo físico ni maquinaria (por la completa tercerización de las labores), sino, esencialmente, la propiedad de la tierra.

La otra parte ha abandonado la producción y se han convertido en rentistas puros, por no poder responder a los requerimientos del modelo, por dificultades en el recambio generacional u otros motivos personales. Sin embargo, no se han desprendido de sus propiedades y, entonces, alquilan sus campos, y la renta del suelo se constituye así en su principal fuente de ingreso (Craviotti y Gras, 2006). Esta característica y la evolución del mercado de tierras en los últimos años explican el involucramiento de estos actores en el conflicto del año 2008, que a simple vista afectaba principalmente a quienes se dedicaban a la producción.

⁶⁵ Esto, sin embargo, no se dio sin serias dificultades, especialmente para los productores de menor escala económica. En particular, en los años noventa, se hizo cada vez más difícil sostener las medianas explotaciones, junto con el nivel de vida urbano de la familia de los ex chacareros aburguesados.

Durante los primeros años posteriores a la devaluación (2002, 2003), las altas sobreganancias que propiciaban las condiciones internacionales favorables y el tipo de cambio a nivel local, fueron captadas por los productores capitalistas que producían sobre superficies arrendadas, porque el precio de la tierra no había sufrido todavía variaciones positivas. Esto se debió a que aún había relativamente pocos productores que pujaban por expandirse tomando tierras en arriendo y a que el capital extra-agrario (en la forma de fondos de inversión y *pools*) recién estaba comenzando a regresar al sector. Entonces, con una demanda baja de tierras, la ganancia extraordinaria fue hacia los productores capitalistas y no hacia los rentistas.

En cambio, luego, con la expansión de los productores agropecuarios y el creciente ingreso de capitales, al aumentar la demanda por campos en alquiler, la tierra comenzó a valorizarse y los precios de los arrendamientos fueron subiendo. Es decir que los beneficios se fueron direccionando hacia los propietarios de la tierra: la ganancia extraordinaria devino renta diferencial del suelo. Y, como contrapartida, la ganancia capitalista fue retornando a niveles más normales.

Ahora bien, las retenciones tienen como efecto reducir la ganancia extraordinaria. Pero como la ganancia capitalista ya no estaría captando la mayor parte de ella, reducirían, al menos en el mediano plazo, la renta del suelo.

Este sería un factor clave para explicar por qué fueron tan activos los pequeños y medianos propietarios pampeanos en su lucha contra las retenciones, y no les interesó casi nada la idea de que se segmentasen por el tamaño de las explotaciones o el volumen producido: la gran mayoría de ellos son más rentistas que productores. Es que la defensa de la renta del suelo ha implicado una posición liberal contraria a cualquier intervención estatal, que no se limita al problema de los ingresos, sino que también cuestiona su actuación sobre el espacio rural, y niega la potestad del Estado de delinear un uso socialmente deseable de los recursos naturales. Se objetó, en este sentido, no sólo la posibilidad de que una medida estatal afectara la percepción de la renta de la tierra, por parte de sus propietarios, sino que se negó la posibilidad de que a través de un mecanismo de retenciones móviles (o cualquier otro) se modificara indirectamente el uso del suelo que los propietarios (y las empresas) quisieran darle.

Hegemonía del discurso tecnologista

La idea de que el Estado no debía regular el desarrollo agropecuario, que se hizo evidente a lo largo del conflicto, poseía una base en la ideología liberal-conservadora que históricamente se vinculaba con los grandes terratenientes. Frente a este discurso, había existido un discurso agrarista,

crítico de la situación de concentración de la propiedad de la tierra como principal traba para el desarrollo agrario nacional y causa del sufrimiento de los pequeños productores.

Este es un discurso que le da gran importancia a la diferenciación social de los productores, tanto por la tenencia del suelo como por el tamaño de las explotaciones o el volumen de su capital. En las últimas décadas se ha sumado, a la denuncia contra el latifundio y los monopolios comercializadores, la crítica a los *pools* de siembra, a la agricultura industrial frente a la agricultura familiar, a los problemas de acceso a las nuevas tecnologías por parte de los pequeños productores y sus efectos concentradores. Frente a estos problemas el discurso agrarista permanentemente ha reclamado la intervención del Estado como vía de solución.

En los últimos años, y en el contexto de crisis de las pequeñas y medianas explotaciones y concentración productiva y económica, la Federación Agraria Argentina (FAA) había retomado con mayor intensidad sus tradicionales banderas de lucha y desplegado una activa crítica en contra de la concentración productiva. En este marco, a mediados de 2004, organizó el "Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra"⁶⁶.

Otro ejemplo de este discurso agrarista actualizado es el editorial de *La Tierra*, del mes de marzo de 2004. En él se consideraba fundamental la cuestión de la tenencia de la tierra, tanto por el elevado precio de los arriendos (que el Estado debería regular) como por la situación de precariedad legal que tenían muchos ocupantes. Además, se criticaba directamente al "modelo neoliberal", por sus efectos concentradores de la tierra y la renta, dirigiendo su discurso hacia el Estado, a quien interpelaba solicitándole la definición de una política clara, sobre la base de la propuesta de una serie de medidas concretas: prohibición de comprar tierras por parte de extranjeros, la regulación estatal de los mercados y un direccionamiento de las retenciones pensadas como "un instrumento tributario que podía ser una formidable herramienta para cambiar el perfil del sector rural con más equilibrio y diversidad, si era capaz de fortalecer a los pequeños y medianos productores, en vez de sacarles en la misma medida que a la agricultura de gran escala." (*La Tierra*, marzo de 2004; p. 4).

Finalmente, en marzo de 2007, la FAA presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de una nueva ley de contratos agrarios, que buscaba

⁶⁶ Ver el documento aprobado en dicho Congreso, en el que se proponía discutir "la tierra... ¿para cuántos? ¿para quiénes? ¿para qué?". FAA, "Documento Base", Actas del Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra, junio de 2004.

limitarlos a una extensión máxima de diez unidades económicas⁶⁷. De todos modos, más allá de la concreción de algunas medidas y acciones, este discurso “agrarista” aparecía más bien dirigido al interior de los agremiados, pues no alcanzaba más que a una escasa difusión pública (Balsa, 2007)⁶⁸.

El discurso liberal-conservador, por su parte, se caracteriza por poner énfasis en la cuestión del respeto al derecho inalienable de la propiedad de la tierra y por pregonar la libertad total de los mercados. Como parte de la estrategia discursiva para lograr mayores adhesiones a la defensa de la propiedad, este discurso no diferencia a los sujetos agrarios según el tamaño de sus explotaciones ni sus formas de tenencia de la tierra. Tan sólo se los distingue por sus actividades (ganaderos, agricultores, cabañeros, etc.). De hecho, la definición de la persona a cargo de la actividad que contiene esta formación es “productor” o “productor agropecuario”. Éste es un concepto bien abstracto que engloba no sólo diferentes escalas económicas sino también muy distintos modos de vida, a diferencia de conceptos como “chacarero”, “hacendado” o “campesino”. En su versión más pura, se des-subjetiva el espacio rural y simplemente se habla del “campo” o del sector rural.

Obviamente, en esta formación discursiva no hay alusiones a la distribución de la propiedad de la tierra. Esta defensa de la propiedad se entronca en una línea más general que pregona que el Estado no debe intervenir en la economía en general, y en el sector en particular. Una de sus ideas fuerza es la “desregulación de los mercados”.

Donde esta formación discursiva aparece con mayor nitidez es en las manifestaciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA). En sus discursos encontramos que el rol del Estado debe ser garantizar “reglas claras para proyectos de mediano y largo plazo” y “la defensa del acceso de nuestros productos a mercados internacionales”. El sujeto típico de este discurso es

⁶⁷ FAA, “Por una nueva ley de arrendamientos”, Memoria y balance 2007/2008, Rosario, 2008. Un análisis de esta propuesta la encontramos en Fernández (2010).

⁶⁸ No hemos podido determinar en qué medida esta escasa difusión del agrarismo tenía que ver con una “censura” de los grandes medios de comunicación (muy vinculados al modelo de agronegocios) o, también, con el poco interés de la dirigencia de la FAA por difundir esta visión del agro. La poca exposición mediática durante el conflicto de 2008 de esta alternativa agrarista nos conduce a suponer la importancia de esta “autocensura” o el escaso interés de la dirigencia por defender esta posición ideológica.

Por otra parte, la FAA no había tenido sólo esta inclinación agrarista, sino que en numerosas ocasiones ya había hecho frente común con las otras entidades agropecuarias ante medidas gubernamentales. Dos perspectivas diferentes que analizan estas alianzas las encontramos en Lissin (2008) y Sartelli (2008).

el “campo”, que cobra una personalización directa. Así, “el campo” es “el principal responsable de la reactivación”, el que “espera reconocimiento”, el que “cuenta con una serie de demandas insatisfechas”.

Si bien es cierto que el conflicto de 2008 potenció una presencia de elementos del discurso liberal-conservador, la hegemonía vinculada con el modelo concentrador se basaba en una tercera formación discursiva a la que hemos denominado “tecnologizante”. Este discurso había venido creciendo en importancia desde los años sesenta, cuando empezó a delinarse, posicionándose por encima de la disputa histórica entre las otras dos formaciones discursivas. Este discurso “tecnologizante” se focaliza en una celebración del avance tecnológico como el elemento central de las virtudes y los problemas del sector. Donde este discurso se encuentra con más fuerza es en las declaraciones de entidades de creación más reciente, como AAPRESID, ACSOJA, o AACREA; pero también ha sido el elemento central en la mayoría de las revistas agropecuarias, con *La Chacra* como su histórica abanderada (obviamente también la revista de AACREA: *Crea*), y en las últimas décadas, por los suplementos de los grandes diarios nacionales: *Clarín Rural* y *El Campo* (de *La Nación*).

La tecnología es presentada como el factor fundamental de la favorable coyuntura actual para el agro y para el país todo. Y la adopción de la tecnología es lo que, para esta visión, ha permitido que el agro realice un gran aporte a la situación política nacional. En estos discursos, encontramos una habitual interpelación al productor para que asuma una mentalidad “empresarial” y centrada en el “conocimiento”, y se relativiza la significación de la dotación de los recursos clásicos.

En algunos casos, este discurso presenta algunos giros de tipo “progresista” que lo diferencian del discurso más conservador. AAPRESID declara que procura que la “actividad agropecuaria se inserte en una sociedad justa”. Sin embargo, en líneas generales, la formación discursiva “tecnologizante” no presenta puntos de antagonismo con la “liberal-conservadora”, por lo cual son fácilmente combinables. De hecho, la mayoría de las entidades y medios de comunicación, si bien ponen énfasis en una de ellas, incorporan muchos elementos de la otra. Por otra parte, el discurso tecnologizante confronta en algunos puntos con el discurso agrarista, ya que este último constantemente ha denunciado los efectos concentradores del proceso de avance tecnológico sin el debido control social y estatal⁶⁹.

En trabajos anteriores, hemos investigado el grado de eficacia interpelativa de estos discursos sobre los productores rurales pampeanos, foca-

⁶⁹ Para más detalles sobre estas formaciones discursivas, ver Balsa (2007).

lizados en una muestra exploratoria en los partidos bonaerenses de Ayacucho y Pehuajó. Allí encontramos que existe una amplia hegemonía del discurso que conceptualizamos como “tecnologizante”. Este discurso ha logrado una enorme eficacia interpelativa, incluso, entre los productores pampeanos de menor tamaño, disminuyendo la importancia de las diferencias entre las posiciones tradicionalmente sostenidas por la FAA frente a las esgrimidas por la SRA (un análisis detallado de los resultados de la encuesta se encuentran en Balsa, 2008b).

Esto puede relacionarse con que en los medios de comunicación especializados existe un claro predominio del discurso “tecnologizante”. Los suplementos rurales y revistas (como Clarín Rural y *La Chacra*) están repletos de referencias a avances en maquinarias y biotecnología, pero sólo muy esporádicamente se hace mención a cuestiones “políticas” (excepto en la coyuntura de 2008), y, en ese caso, siempre tienen cierto tono “nuevo” (a favor del diálogo). En forma más implícita se detectan elementos del discurso liberal-conservador. El discurso agrarista, por su parte, es el gran ausente en los medios. No sólo ninguna nota asume esta posición, sino que, hasta el conflicto de 2008, no se reproducen las expresiones de la FAA ni se comentan sus actividades críticas (Balsa, 2007).

A partir de los elementos presentados hasta aquí, quisiéramos llamar la atención sobre el hecho de que es en el plano ideológico donde más se visualiza la pérdida de claridad que ha significado el cambio de accionar de la FAA. Porque, más allá de situaciones económicas coyunturales, el futuro de los productores pampeanos de menor tamaño va a depender de la capacidad estatal para limitar los procesos de concentración productiva. En un futuro, habrá que evaluar cuánto la actuación de la FAA, durante el conflicto de 2008, contribuyó a dar mayor empuje al discurso “tecnologizante” (y a su confluencia con el liberal-conservador), y a la idea de que el Estado y la sociedad en su conjunto deben mantenerse al margen de toda posible discusión acerca del mejor tipo de agricultura para todo el país.

Actores tradicionales, Estado y limitaciones para la construcción alternativa

Si bien, como planteamos con anterioridad, la mayoría de los chacareros se han “aburguesado”, existe otro importante porcentaje que ha mantenido la mayor parte de las características familiares que los distinguían. Dentro de este grupo podrían distinguirse dos tipos, desde el punto de vista analítico, pues, en realidad, existe un *continuum* entre ellos.

Por un lado, los pequeños productores, con muy bajo grado de capitalización, que resultan completamente marginados por el modelo y que se mantienen con un perfil cercano a la producción para la subsistencia

y la venta local de productos de consumo diario (algunos se refugian en actividades periurbanas de las distintas localidades), o con un estilo de producción “antiguo” (sin innovaciones tecnológicas), pero orientado al mercado, y sobreviven a costa de niveles de vida muy precarios (sin electricidad, viviendas sin comodidades modernas, automóviles viejos, escasa mercantilización de consumos e insumos).

Por otro lado, encontramos a los que cuentan con mejor dotación de recursos, que logran responder (al menos en un sentido mínimo) a los requerimientos tecnológicos y se orientan a una producción para el mercado. El mayor problema que enfrentan actualmente es que, para poder alcanzar una escala mínima para desarrollar su producción en forma rentable, necesitan alquilar tierras a sus vecinos y, como ya comentamos, en los últimos años la competencia con los productores más grandes o los *pools* de siembra los han ido dejando fuera del mercado de tierras. De este modo, muchos de ellos han visto cómo se reducía la superficie que tradicionalmente operaban y se han tenido que limitar a los lotes que poseen en propiedad⁷⁰.

Ahora bien, si existen tensiones con el modelo productivo imperante, ya que en un mismo espacio conviven actores claramente beneficiados y otros que ven disminuidas sus posibilidades de subsistencia, cabe preguntarse ¿por qué no surgió, en el contexto del conflicto, una propuesta de desarrollo alternativa? Por ejemplo, podrían haber surgido respuestas tendientes a: a) promover un desarrollo rural de otro tipo, basado en la limitación y regulación del ingreso del capital extra-agrario, b) reclamar la priorización del mercado interno por encima de la producción de *commodities* exportables, c) demandar el apoyo a la diversificación productiva y el agregado de valor en origen, ch) ofrecer sugerencias orientadas a la articulación equitativa entre los diferentes actores del sistema productivo, d) “desincentivar” el cultivo de soja transgénica, e) promover la diferenciación impositiva sobre la base de la escala y riesgo climático, f) estimular el financiamiento para mecanización y desarrollo de la ganadería, g) incentivar el desarrollo e implementación de tecnologías menos contaminantes y erosivas y adecuadas a diferentes escalas y tipos de producción, entre otros lineamientos.

Sin pretender agotar las respuestas, planteamos una serie de elementos que consideramos relevantes para empezar a comprender las dificultades para pensar un modelo de desarrollo diferente.

⁷⁰ Para una descripción de los productores familiares que persisten/resisten en los márgenes del modelo, ver López Castro (2009).

Debilidad de la representación política de los agricultores familiares

Por una parte, las alternativas no llegaron a plantearse (articuladamente, al menos) porque no existía una base social suficientemente fuerte numérica y políticamente que sustentase el diseño y sostenimiento de otro modelo. La falta de una representación política de peso implicó escasa capacidad para incidir en la agenda pública y de gobierno, y en este sentido, parecen haber tenido un papel fundamental los cambios ocurridos en el interior de la FAA, organización que históricamente había representado a estos sectores de producción familiar y había sostenido la idea de un desarrollo rural diferente al dominante en la actualidad. Como ya comentamos, su discurso agrarista había reclamado la intervención del Estado como solución a estos problemas. Pero esta perspectiva fue drásticamente abandonada en marzo de 2008.

En el conflicto, aparecen las cuatro entidades agrupadas en la Mesa de Enlace como defensoras del modelo agropecuario actual. En el caso de los grandes productores y los emprendimientos de inversión de capital (los *pools*, principalmente) identificados con SRA, CRA y CARBAP esta posición resulta coherente, pues han sido, junto con las exportadoras y conglomerados agroindustriales transnacionales, los grandes beneficiarios de este modelo. En el caso de la Federación Agraria, por su parte, esta adhesión acrítica de la dirigencia resulta compleja, porque si bien, parte de sus integrantes han ganado en función de su carácter de propietarios de la tierra, otra parte de sus bases ha sido afectada muy negativamente por el modelo dominante.

Actualmente, el panorama político en el interior de la FAA es de conflicto por la creciente tensión entre la dirigencia alineada con los reclamos de la Mesa de Enlace, personificada en su presidente, Eduardo Buzzi (cuyas aspiraciones políticas lo llevan a buscar alianzas y posicionarse más allá de su rol de dirigente corporativo) o el dirigente entrerriano Alfredo de Ángeli, y los grupos que solicitan volver a las propuestas originales y la defensa de los productores marginados por el sistema.

En este sentido, se entiende el cuestionamiento público del “cajoneo” de proyectos que impulsaba la organización antes del conflicto, como la Ley de Arrendamientos y contra la extranjerización de la tierra. La corriente interna identificada con los pequeños productores reclama que se dé tratamiento e impulso a esos proyectos, que la “FAA evita mencionar dada su probada defensa del paquete tecnológico sojero, consecuente con el sujeto agrario que irrumpió en dicha organización durante el conflicto agrario y el cambio cultural sufrido por sus antiguos asociados, en especial en la Pampa Húmeda” (Livolti, 2010).

Por otra parte, frente a la propuesta de solución planteada por la cúpula empresarial (con el apoyo enfático de Buzzi) de promover una mayor devaluación, dentro de la FAA se generaron pronunciamientos, incluso de dirigentes cercanos al propio titular de la entidad, que van en sentido opuesto a la postura de su presidente. Si bien estas voces alternativas no plantean sus propuestas en términos de una ruptura con la dirigencia, han impulsado acciones y posicionamientos que se diferencian claramente de las posturas favorables al modelo concentrador.

Ejemplos de esta nueva postura son la presentación en el Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Contratos Agrarios, por parte de dos ex presidentes de la entidad (hoy diputados), que busca favorecer la distribución de la tenencia de la tierra y erradicar las distintas formas de concentración de su propiedad y explotación, y el reclamo de una política ganadera que favorezca la producción familiar y permita “recuperar las tapers, facilitar los fondos para tranqueras, alambrados, pasturas, todo lo necesario para diversificarse, para poder recuperar la producción de pollos a galpón, para que tengan medio centenar de chanchas madres para cría. Así se genera producción, trabajo y arraigo del agricultor familiar, hoy castigado y desplazado por el monocultivo de soja” (*Página 12*, 18-04-2010)⁷¹.

Algunas líneas internas de la FAA (como el Movimiento Campesino de Liberación) y otros movimientos de matriz agrarista (como el Movimiento Nacional Campesino Indígena o el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, salvando las distancias que existen entre estas organizaciones) han intentado delinear estrategias de acercamiento al gobierno o de aprovechamiento de la coyuntura para plantear una perspectiva diferente sobre lo que ocurriría efectivamente en “el campo”. Pero, en comparación con el resto de los actores involucrados, estos sectores aparecieron como minoritarios y no lograron tener suficiente poder como para incidir en la agenda sobre la cuestión agraria.

Identidades distorsionadas

Es posible que las representaciones sociales, generadas por el propio sistema productivo actual, hayan bloqueado la posibilidad de que muchos pequeños medianos productores se sumasen a esas alternativas. Se habría instalado

⁷¹ Estos planteos alternativos son rescatados esporádicamente por algunos medios, pero no parece que ganen peso político a nivel de la agenda nacional. Lo que sí puede resultar interesante es el papel que el fortalecimiento de estas líneas internas podrían tener al interior de la FAA, al generar un espacio de disputa con intención de volver a una matriz agrarista.

una imagen de productor modelo, un tipo “deseable” de productor, protagonista del desarrollo y éxito económico del sector, definido por su relación con la tecnología de punta y su carácter innovador y empresarial.

De modo que los “ganadores” se habrían convertido en grupo de referencia (según la terminología de Merton, 1965) para gran parte de los actores del sector, a partir de su identificación con un tipo deseable y deseado, influyendo en las conductas y valores de los productores más postergados por el sistema vigente, al menos dentro de la Región Pampeana. Teniendo esta idea en cuenta, resulta posible explicar la intervención en el conflicto, en apoyo a la posición “del campo”, de productores cuyos intereses se veían afectados por las características y la dinámica del modelo agropecuario actual.

El modelo habría penetrado desde el punto de vista de las prácticas: el nuevo perfil productivo (empresarial-innovador) hizo mella y transformó las visiones de parte de los productores. Buena parte de los productores con perfil familiar y con serias dificultades para mantenerse en actividad se perciben a sí mismos como en falta frente al modelo del productor exitoso de tipo empresarial, con una identidad incompleta, distorsionada, incapaces de asumirse positivamente como sustrato social de otro modelo de desarrollo agrario.

En esa clave podría explicarse, en alguna medida, el apoyo de productores del sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires a reclamos que no los beneficiaban en forma directa y que eran esgrimidos por actores asentados en la zona núcleo, que los propios productores del Sudoeste identificaban, poco tiempo antes, como fuente de conflicto local, por la presión que imprimían sobre la tierra al trasladar sus existencias ganaderas a las zonas marginales.

Ahora bien, la capacidad de los productores “exitosos” para lograr la adhesión de aquellos menos beneficiados se debió también a la operación hegemónica de articulación de demandas parciales en torno de la lucha central contra las retenciones⁷². Así, en la llegada de los productores a las rutas, convergieron elementos tan diversos como las nuevas características socioproductivas de los actores sociales, las construcciones culturales e identitarias, en torno al modelo productivo, viejos reclamos no atendidos, un clima de movilización abonado por una tradicional oposición a la intervención del Estado sobre el sector (aun cuando las políticas podrían beneficiarlos o, efectivamente, los beneficiar). Es que, sin dudas, ayudados por una deliberada acción de los medios de comunicación, los productores

opuestos al gobierno lograron articular un conjunto muy heterogéneo de demandas en torno al rechazo a las retenciones móviles, y allí se encuentra buena parte del éxito de la protesta.

Pero, además, es posible identificar otros elementos que jugaron un papel importante en la legitimación de los reclamos del “campo” y en el apoyo que concitó en pueblos y ciudades intermedias de toda la región: el papel del gasto de la renta en estas localidades y las estrategias previas de legitimación llevadas adelante por distintas entidades agropecuarias. En primer lugar, relacionado con el nuevo peso de la renta en la economía agraria, los rentistas y cuasi rentistas se constituyeron en fuente de renovación para los pueblos, ya que invirtieron en las comunidades, instalando emprendimientos comerciales o inmobiliarios, dinamizando las tramas económicas locales (Gras y Hernández, 2008).

La existencia de un circuito de gastos de la renta y las ganancias en las localidades llevó a que también parte de las comunidades locales se manifestaran en contra de una medida que afectaba a actores fundamentales de su desarrollo económico. La participación de estos mismos actores y otros miembros de las clases medias acomodadas de los pueblos en los *pools* de siembra explica, por otra parte, que una porción importante de los miembros más influyentes de las localidades se hayan sentido tocados en su interés particular y hayan conseguido el apoyo de la comunidad de la que forman parte (Barsky y Dávila, 2008).

En segundo lugar, las entidades impulsoras del discurso tecnologizante (AACREA y AAPRESID, principalmente) desarrollaron, en los últimos años, estrategias de construcción política (AAPRESID) y de acción social (AACREA), que han promovido que las poblaciones del interior identificaran a los productores exitosos, que se declaraban afectados por la medida del gobierno, como gente preocupada por el bienestar y el desarrollo de los ámbitos locales (Gras y Hernández, 2008)⁷³.

Vemos así que la hegemonía tecnologizante contó no sólo con un discurso propio sino que también tuvo agentes que construyeron localmente consenso en torno al modelo. Por otro lado, esta hegemonía interpelaba al

⁷³ Además, algunas grandes empresas, vinculadas a estas entidades, tuvieron un papel importante, durante las acciones directas, por el apoyo logístico que brindaron a los cortes de ruta (con camionetas y handies). Aunque no aparecieron abiertamente como promotoras de las acciones o con una toma de posición, públicamente, a nivel de los actores involucrados se identificaron con los productores más pequeños, y eso puede haber fortalecido su posición y legitimidad a pesar de las condiciones muy diferentes en que productores medianos y pequeños enfrentaron el mercado con respecto a las grandes empresas.

⁷² Sobre la hegemonía como articuladora de demandas ver Laclau y Mouffe (1987).

conjunto de los productores ofreciendo un tipo de subjetividad a imitar. Además, lograron articular demandas diferentes a las retenciones, aunque no antagónicas al modelo dominante.

Limitaciones de la propuesta estatal

Finalmente, en lo que respecta al papel del Estado, en 2008 el gobierno no parecería tener un proyecto alternativo de desarrollo agrario. Implícitamente se podría identificar una tendencia a sostener la estructura productiva y social en las actuales condiciones, pero con un aumento de la presión fiscal sobre el sector, a través de la suba de las alcuotas de las retenciones a las exportaciones. Aunque, indirectamente, las retenciones móviles podrían tener algún impacto, en detrimento del modelo vigente, al desalentar en algún grado el cultivo de la soja, con el incentivo de mayores grados de diversificación productiva y la orientación del sector hacia una matriz menos concentradora.

Las dificultades para el planteo de alternativas no resultaba, sin embargo, sólo una cuestión de voluntades políticas, sino que jugaban también elementos que complicaban el diseño y aplicación de un programa diferente. Uno es la aún débil estructura e institucionalidad estatal agraria (sólo recientemente se creó el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar).

Un hecho ilustrativo, en este sentido, es la escasa o nula participación de la Secretaría de Agricultura en el devenir del conflicto durante 2008. A la sistemática política de desmantelamiento de la estructura del ámbito estatal específico durante toda la década del noventa, se suma su pobre reconstrucción a partir del cambio de rumbo político en 2003. El tratamiento del sector desde el gobierno se había centrado en aspectos recaudatorios y de comercialización y se había puesto mucho menor énfasis en el diseño de una política rural y agropecuaria integral.

Si a esto agregamos el deterioro del sistema de información agropecuaria del INDEC, nos encontramos frente a un escenario en que las tomas de decisión y la implementación de medidas respecto al sector agropecuario no cuentan con las mínimas condiciones de recursos necesarios. Así, actualmente, no hay información confiable para diagnosticar y diseñar medidas de acuerdo con ese diagnóstico, los recursos humanos e institucionales no resultan suficientes, y, como organismo estatal, el Ministerio de Agricultura no parece contar aún con suficiente peso político como para poder incidir en la agenda.

De todos modos, y a raíz de la necesidad de resolver el conflicto político y social desencadenado en 2008 y proponer una alternativa política frente a los sectores dominantes, en 2010 se inició un proceso de consulta para

el diseño participativo del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA2), que pretende constituirse en una política estatal y no de gobierno, según el planteo oficial. Y aunque el diseño metodológico plantea la participación amplia de los diversos actores sociales agrarios, y la visión y misión resultan lo suficientemente amplias e indeterminadas para generar cierto margen para la propuesta de un modelo alternativo, su configuración efectiva resulta muy compleja y un campo de lucha en la actualidad (PEA2, 2010a).

Por otro lado, gran parte de la estructura estatal de desarrollo de ciencia y tecnología para el sector adhiere a una visión productivista de la actividad y promueve la adopción de modelos de paquete tecnológico cerrado. Es decir, el propio aparato estatal está influenciado por el discurso "tecnológico", que ha colonizado sus estructuras. Si resulta muy complicado que el Estado impulse un proyecto alternativo, por falta de sujetos sociales que lo sostengan, esto se agrava aún más por la gravitación del discurso tecnogizante que moldea las visiones de los agentes de desarrollo y hace que las experiencias dirigidas a la construcción de esa alternativa sean marginales. Más allá de algunos esfuerzos orientados a la generación de tecnologías, apropiadas para diferentes segmentos de productores y de políticas diferenciadas orientadas a la agricultura familiar, el mayor causal de acciones se dirige en otro sentido y representan obstáculos para el diseño e implementación de una política agraria diferente.

Estos problemas se reflejan, en gran medida, en el diseño del PEA2: a pesar de que se busca promover un modelo orientado al mercado interno y de valor agregado en origen, los objetivos, en este sentido, son muy poco específicos, mientras que los que se refieren a la matriz agroexportadora actual y de agroindustria concentrada están muy bien delineados (PEA2, 2010b). Esto marca la perspectiva de los funcionarios del Ministerio de Agricultura encargados de redactar los primeros documentos a ser sometidos a discusión.

De modo sintomático, la agricultura familiar no fue incluida en la mesa de discusión de los actores productivos (Consejo Federal del Sistema Productivo) sino en la de Desarrollo Social y Económico, porque es considerada como un movimiento social, vinculada a las políticas de desarrollo social, de superación/mitigación de la pobreza y no en su dimensión de actor productivo vinculado fundamentalmente a la producción de alimentos para el mercado interno. En relación con esto, la participación de las diferentes organizaciones representantes de la agricultura familiar, campesinos y pueblos originarios también ha sido acotada.

De todos modos, y a pesar de las limitaciones, la actual coyuntura resulta interesante, un avance respecto a períodos anteriores por la convocatoria a un diseño participativo de la política agraria. Será necesario que se

consigan algunos consensos mínimos, entre las diferentes organizaciones representativas de la agricultura familiar y el campesinado, para poder ganar peso específico en las negociaciones y construir un espacio, en articulación con otros actores, para discutir el modelo dominante y traccionar la construcción de una alternativa de desarrollo más equitativa y sustentable social, ambiental y económicamente.

Comentarios finales

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, y sin ánimo de haber agotado las múltiples facetas del proceso conflictivo, podemos destacar los elementos que consideramos de particular relevancia para explicar sus características e implicancias.

Por una parte, el escenario social agrario pampeano se ha transformado, en las últimas décadas, de tal manera, que ha dado lugar a un modelo en el que han crecido en importancia las grandes empresas agropecuarias y los emprendimientos de colocación financiera en la actividad agropecuaria (*pools* y FID) y los ex chacareros aburguesados, con un consiguiente aumento de la gravitación de los contratistas de servicios.

Junto con estos actores, que aparecen como los más dinámicos, muchos productores medianos y pequeños (articulados, en posiciones más o menos subalternas, al sistema) viraron sus estrategias hacia el rentismo o cuasi rentismo, mientras otros son marginados o expulsados directamente de la actividad. Esta configuración social y la instauración definitiva de un modelo basado en la producción de *commodities* exportables, la concentración del capital, nuevos esquemas de organización del trabajo, en el cual la renta y la ganancia capitalista (y ya no el trabajo familiar) representan las fuentes principales de ingresos, permite explicar en parte la posición favorable a los planteos de la Mesa de Enlace por parte de una porción significativa de los productores.

En segundo lugar, las dificultades para construir un planteo alternativo provienen de diferentes ámbitos. Por un lado, y en relación con lo antedicho, existe una escasa base social para sustentar un modelo de agro diferente, en un contexto en que las perspectivas de los productores, permeadas por el discurso tecnolizante, legitiman los preceptos del modelo, aun cuando se encuentren en una situación desfavorable. Pero, además, el estrato de productores que podría impulsar esa opción tiene una escasa representación y peso político, lo cual limita su posibilidad real de incidir en la agenda pública y de gobierno.

En este sentido, parece haber jugado un papel crucial el abandono del discurso y las acciones de perfil agrarista por parte de la FAA, entidad que históricamente los había representado.

Por último, desde el Estado, que podría haber actuado como articulador e impulsor del proyecto alternativo, existen debilidades institucionales y un posicionamiento ideológico que limitan las posibilidades de generar una propuesta de desarrollo rural alternativo que, al menos, pueda resguardar y potenciar el lugar de la agricultura familiar.

Bibliografía

- AZCUY AMEGHINO, E. y D. FERNÁNDEZ (2007), "Yo acumulo, tu desacumulas, él se funde: en torno a los mecanismos económicos del proceso de concentración del capital en la agricultura argentina a comienzos del siglo XXI", ponencia presentada en las V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, Fondo de Cultura Económica-UBA, Buenos Aires.
- BALSA, J. (2006), *El Desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 1937-1988*, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Bernal.
- BALSA, J. (2007), "Las disputas hegemónicas en torno de las cuestiones sociales agrarias de la pampa argentina en la actualidad", en Girbal-Blacha, N. y S. R. Mendonça (coords.), *Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil*, Prometeo, Buenos Aires.
- BALSA, J. (2008a), "Cambios y continuidades en la agricultura pampeana entre 1937 y 2002. La zona agrícola del norte bonaerense", en Balsa, J., G. Mateo y S. Ospital, *Pasado y presente en el agro argentino*, Lumiere, Buenos Aires.
- BALSA, J. (2008b), "La ideología de los productores rurales pampeanos y su análisis en términos de las disputas hegemónicas", *Realidad Económica*, N.º 237, 1.º de julio / 15 de agosto.
- BARSKY, O. y M. DÁVILA (2008), *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*, Sudamericana, Buenos Aires.
- BASUALDO, E. (2008), "El agro pampeano: sustento económico y social del actual conflicto en la Argentina", *Cuadernos del CENDES*, Año 25, N.º 68, Tercera Época, mayo-agosto.
- Craviotti, C. y C. GRAS (2006), "De desafilaciones y desligamientos: trayectorias de productores familiares expulsados de la agricultura pampeana", *Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales*, IDES, Vol. 46, N.º 181, abril-junio, pp. 117-134.
- DE MARTINELLI, Guillermo (2008), "Pools de siembra y contratistas de labores. Nuevos y viejos actores sociales en la expansión productiva pampeana reciente", en Balsa, J., G. Mateo y S. Ospital (comps.), *Pasado y presente en el agro argentino*, Lumiere, Buenos Aires.
- FERNÁNDEZ, D. (2010), "Análisis de los límites que propone una ley de arrendamientos a la concentración económica en la Región Pampeana", *Documentos del CIEA*, N.º 5, Buenos Aires.
- GRAS, C. y V. HERNÁNDEZ (2009), "Son los piquetes de la abundancia. Actores y Estado en el conflicto agrario argentino", *Latin American Studies Association*, XXVIII Congreso Internacional, Río de Janeiro, Brasil.

- LACLAU, E. y C. Mouffe (1987), *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Siglo XXI, Madrid.
- LISSIN, L. (2008), "Acción colectiva empresaria ¿Homogeneidad dada o construida? Un análisis a la luz del estudio de las corporaciones empresarias en la crisis del 2001", *Documentos de Investigación Social IDAES-UNSAM*, N.º 3.
- LIVOLTI, J. L. (2010), "La tierra para quiénes y para qué", Suplemento Cash, *Página/12*, 4 de abril, Buenos Aires.
- LÓPEZ CASTRO, Natalia (2009), *La persistencia de la producción agropecuaria familiar pampeana. Estrategias y trayectorias en el Sudoeste bonaerense (Puán y Saavedra, 1987-2007)*, Tesis de Maestría en Estudios Sociales Agrarios de FLACSO- Argentina, Inédita.
- MERTON, R. K. (1965), *Teoría y Estructura Sociales*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- MURMIS, M. (1979), "Sobre una forma de apropiación del espacio rural: el terrateniente pampeano y un intento por transformarlo", en Murmis, M., J. Bengoa y O. Barsky, *Terratenientes y desarrollo capitalista en el agro*, CEPLAES, Quito.
- PEA2 (2010a), *Manual metodológico*, versión 2, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Buenos Aires.
- PEA2 (2010b), *Instrumento 3 - Análisis de los Objetivos del PEA2*, Documentos de trabajo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Buenos Aires.
- POSADA, M. (1998), "Agricultura, economía y sociedad: pools y fondos de inversión en la pampa argentina", *Informe de Coyuntura*, N.º 36.
- SARTELLI, E. (dir.) (2008), *Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía (marzo-julio de 2008)*, Ediciones RyR, Buenos Aires.

El conflicto agrario argentino desde la Resolución 125

Oswaldo Barsky

1. Las políticas agrarias gubernamentales

1.1. El perfil de las políticas agrarias gubernamentales

Resulta complejo el análisis de las políticas agropecuarias desarrolladas en la Argentina desde el año 2002. Éstas no sólo muestran enormes vaivenes en términos de las transferencias de excedentes entre los sectores primarios, los sectores agroindustriales y comercializadores, y los consumidores, sino también superponen, en direcciones no necesariamente similares, acciones y resoluciones de diversas esferas del Estado, como reflejo de una institucionalidad altamente concentrada en la Presidencia de la Nación.

Ello reduce fuertemente el rol de los Ministerios y Secretarías de Estado, y afecta una continuidad burocrática y funcional que permitiría que cierto acervo acumulado de conocimientos hiciera viable gestiones funcionales a los objetivos estratégicos de cada área. Si bien se mantienen estos cargos a nivel formal, las decisiones se toman en otros niveles, y también las medidas operativas. Los organismos, vaciados de funciones estratégicas, elaboran estudios y políticas que no guardan relación con las operaciones reales sobre la sociedad. Las medidas coyunturales y la improvisación continua generan alta incoherencia. Los resultados agregados son negativos, pero, además, los efectos indirectos provocan desconcierto en los actores involucrados y paralizan procesos comerciales, corrientes de inversión y procesos productivos.

El ejemplo paradigmático es el funcionamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), devenida recientemente en Ministerio. Dependiendo del Ministro de Economía, esta Secretaría, aún debilitada por las políticas implementadas en la década del noventa, tenía formalmente el manejo de la "cuestión" agropecuaria. Es